

Extraído de Viento Sur

<http://vientosur.info/spip.php?article12974>

Catalunya ante el referendum

1-0: razones para movilizarnos y votar

- solo en la web -



Fecha de publicación en línea: Martes 5 de septiembre de 2017

Descripción:

El gran reto es conseguir que este proyecto de fondo se abra paso entre la niebla y el ruido actuales, el 1-O y los días siguientes y habremos contribuido modestamente, a crear un horizonte de mayor libertad, más amable y menos brutal, para todas las mujeres y hombres del común, en la península y más allá

Licencia de Creative Commons BY - NC- ND Viento Sur

Versi3n original:

<http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2017/09/05/1-0-raons-per-mobilitzar-nos-i-votar/#.Wa5O3rUaObg.twitter>

A pocas semanas del 1 de octubre, el escenario pol3tico catal3n contin3a atravesado de ruido y niebla. La hoja de ruta del gobierno de Junts Pel S3 a3n suscita muchos interrogantes y no acaba de interpelar sectores sociales clave para llevar adelante un desaf3o como el que se plantea. Por otra parte, hay una realidad innegable: si las pol3ticas de bloqueo del PP acaban imponi3ndose de manera autoritaria, no s3lo las leg3timas aspiraciones al autogobierno de la ciudadan3a catalana experimentar3an un duro golpe. Muchas demandas democratizadoras que se plantean en el conjunto del Estado se ver3an tambi3n postergadas. En este contexto, quedarse en casa no parece una alternativa. Es m3is, movilizarnos (y votar, incluso con un "s3-") puede ser una manera de rebelarse contra el autoritarismo centralista y de hacer avanzar un posible acuerdo plurinacional libre y entre iguales.

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, el reclamo de independencia en Catalunya ha experimentado un crecimiento hist3rico. Este crecimiento se ha visto espoleado por las pol3ticas recentralizadoras (y en muchos casos preauton3micas) del PP, marcadas por un nacionalismo de Estado ofensivo, incapaz de plantear ninguna alternativa en positivo al agotamiento del modelo actual.

Sin embargo, la posici3n central que se ha ido afianzando en la pol3tica catalana, m3is que el independentismo en sentido estricto, es el soberanismo, y dentro de 3ste, el soberanismo republicano y progresista. El soberanismo -independentista, confederalista, federalista- representa hoy una amplia mayor3a de la sociedad catalana. Su principio b3sico es que Catalunya es una naci3n y que su pueblo tiene derecho a decidir su relaci3n con Espa3a, sea la separaci3n o alg3n tipo de v3nculo libremente acordado. Dentro del soberanismo, por su parte, es clara mayor3a el soberanismo republicano y progresista, esto es, el que defiende la necesidad de acomp3ar las reivindicaciones nacionales con reivindicaciones sociales, democr3ticas, medioambientales y de g3nero avanzadas, as3 como con un compromiso claro con la regeneraci3n 3tica y la lucha contra la corrupci3n.

En mi opini3n, uno de los errores de la actual mayor3a parlamentaria independentista ha sido no leer adecuadamente esta centralidad del soberanismo republicano y progresista. Ya en las elecciones del 27-S, los partidos independentistas obtuvieron una clara mayor3a en esca3os, pero no en votos. A pesar de ello, el gobierno de Junts Pel S3 prometió llegar a la independencia en 18 meses. Pronto result3 obvio que el apoyo social disponible no hac3a viable este proyecto. Entonces, se decidi3 impulsar una nueva consulta con vocaci3n plebiscitaria, esta vez bajo la forma de un refer3ndum unilateral.

Supuestamente, este nuevo cambio en la hoja de ruta persegu3a un doble objetivo. Por un lado, mostrar determinaci3n a los ya convencidos y a los dudosos. Por otra parte, implicar en el proceso a sectores no independentistas. El 3xito de la estrategia es discutible. El unilateralismo, en efecto, puede considerarse una alternativa leg3tima frente a un gobierno, el de Rajoy, que ha negado todo di3logo bilateral y que ha practicado el bloqueo de manera reiterada. Sin embargo, aplicado a un acto tan formalizado como un refer3ndum, implica algunos problemas innegables.

De entrada, dificulta la implicaci3n de sectores no convencidos. Y es que un refer3ndum, a diferencia de otros actos unilaterales como la insumisi3n fiscal o movilizarse para detener un desahucio, exige asegurar ciertas garant3as de imparcialidad que demandan la implicaci3n (y exposici3n) de funcionarios p3blicos, un control amplio del aparato administrativo, policial y jurisdiccional, as3 como la inclusi3n de la oposici3n. Esta es una de las principales diferencias entre este tipo de desobediencia institucional y un acto de desobediencia civil.

Un refer3ndum unilateral de independencia requiere no s3lo la imparcialidad de los convocantes, sino la

1-0: razones para movilizarnos y votar

adhesión de una estructura administrativa y jurisdiccional imprescindible para validarlos como tales, pero que, por diferentes razones, puede estar en contra de una iniciativa de este tipo. En cambio, una huelga, la ocupación del espacio público o un acto de desobediencia civil, dependen en gran medida, y casi de forma exclusiva, de la voluntad de quienes están dispuestos a impulsarlo y asumir sus consecuencias.

La opción por esta vía ha llevado un problema adicional: al tratarse de un desafío a la legalidad estatal (y autonómica) rodeado de múltiples formalidades e impugnado por diferentes razones, la mayoría independentista se ha visto forzada a ocultar información, evitar medidas imprescindibles que podrían exponer a dirigentes políticos (comprar urnas, etc.) e incluso restringir la transparencia y el debate parlamentario.

Esta aceleración ha dificultado en parte lo que era el objetivo de la iniciativa: un debate más profundo y con tiempo sobre el referéndum y sobre las consecuencias de una eventual independencia. Las objeciones a esta vía, de hecho, no sólo han provenido de sectores contrarios al derecho a decidir. Independentistas declarados, como Vicenç Fisas, advirtieron pronto sobre los puntos débiles de una estrategia de aceleración unilateral que, al no aspirar ni siquiera a un umbral mínimo de participación, podría terminar por desprestigiar un instrumento tan valioso como un referéndum de autodeterminación.

Muchos sectores populares, por otra parte, no entienden que la promesa de un referéndum unilateral no haya venido acompañada de medidas sociales, fiscales o medioambientales avanzadas que anticipen aquí y ahora la República que se aspira a construir. O lo que es peor, que el partido que encabeza la coalición de gobierno se haya negado a votar la moción de censura al PP, haya coincidido con la derecha española en muchas de sus políticas antisociales, mantenga entre sus cargos directivos personas vinculadas a casos graves de corrupción, o cuente entre sus filas con un consejero de empresa que se jacta que con el gobierno actual no se ha revertido ni un solo concierto educativo ni sanitario.

No se trata de un elemento menor. Ciertamente, las movilizaciones soberanistas de los últimos años no son ni una invención burguesa ni el producto de la manipulación de un puñado de listillos. Su componente democratizador, anticentralista y antiautoritario es indiscutible. Pero este no es su único rostro. También han venido acompañadas de la irrupción de un cierto discurso "etnicista, clasista y rampante", como lo ha definido Josep Lluís Carod Rovira, que aleja a mucha gente: desde sectores populares, especialmente castellanohablantes y recién llegados, hasta soberanistas abiertamente no nacionalistas. Y no sólo eso. Muy a menudo han sido el vehículo a través del cual una parte de la derecha ha pretendido frenar su decadencia y fustigar a sus adversarios progresistas, como muestran los reiterados ataques de un cierto nacionalismo en el ayuntamiento de Barcelona gobernado por los 'comuns'.

Esto bastaría para entender muchas personas genuinamente catalanistas y de izquierdas que, de manera legítima, se niegan a participar y votar en el 1-O. Sin embargo, sería un error que las críticas necesarias a muchas de las políticas adoptadas por el gobierno de Junts Pel Sí dejen la vía abierta a una intervención autoritaria del PP que lesione más el autogobierno de Catalunya y que quiera humillar sus instituciones.

La razón es sencilla. El soberanismo catalán, incluso en sus versiones más nacionalistas y conservadoras, no deja de ser un fenómeno defensivo, que no puede colocarse en ningún caso al mismo nivel del ofensivo nacionalismo españolista que se ha desplegado en los últimos años. Este nacionalismo de Estado, practicado por el PP y C's (y desgraciadamente demasiado a menudo por el PSOE), es de hecho lo que está en el origen de la situación de bloqueo actual. Sin él no se entendería el antiguo golpe contra la Constitución que según Páez Royo se perpetró con la sentencia sobre el Estatut. Tampoco se entendería la instrumentalización del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales importantes realizada por el PP y denunciada tantas veces por entidades progresistas como Jueces para la Democracia. Y no se explicaría, tampoco, la utilización mafiosa de los servicios de inteligencia y policiales contra el soberanismo catalán, llevada a cabo con

total descaro y alevosía.

Frente a esta ruptura reiterada de la legalidad vigente, se entiende que el derecho a decidir, o mejor, de autodeterminación, se alce como una respuesta legítima a la que la mayoría de la ciudadanía de Catalunya se niega a renunciar. Y no es la primera vez. Este derecho, reconocido en los pactos internacionales de derechos humanos, fue defendido por el grueso del antifranquismo democrático, incluido el PSC y el PSOE, y ha sido ratificado en numerosas ocasiones por el Parlamento de Catalunya. Que el gobierno catalán no esté en condiciones de asegurar por sí solo su ejercicio efectivo a través de un referéndum con plenas garantías puede atribuirse a una mala lectura del contexto político. Pero la responsabilidad principal debe imputarse al PP y sus aliados. Son ellos quienes, en vez de torpedear de manera sistemática, podrán haberle abierto camino a través de una simple reforma por mayoría absoluta de la ley orgánica de referéndum.

En un contexto así, un fracaso del 1-0 sería más que el fracaso de la hoja de ruta de un gobierno. Sería un golpe decisivo a la posibilidad de avanzar en el ejercicio pleno del derecho a decidir. Y sería un golpe, también, a las iniciativas republicanas, democráticas, de impugnación del Régimen de 1978. En Catalunya, en Galicia, en Euskadi y el conjunto de pueblos y territorios de España. Ante un escenario regresivo de este tipo, el soberanismo republicano y progresista no puede quedarse en casa. Al contrario, más allá de las discrepancias con la hoja de ruta del gobierno actual, las fuerzas de cambio cometerán un grave error si no se levantan contra el PP y sus ataques a las reivindicaciones democráticas de autogobierno. En Catalunya y fuera de ella.

En este contexto, si la Generalitat consigue que el 1-0 haya urnas y espacios para votar, sin poner en riesgo a los trabajadores municipales, será difícil no implicarse. Para frenar la prepotencia del PP y como acto de afirmación soberana. Este voto podrá, de manera legítima y con razones de peso, ser un voto en blanco, por el no o por el sí. De hecho, un voto por el sí incluso tendrá sentido desde la discrepancia con la hoja de ruta gubernamental. Primero, como una forma de rebelión contra el centralismo y el autoritarismo. Y segundo, porque también sería una manera de avanzar hacia la propuesta de fondo mayoritaria entre los 'comuns' y arraigada en una tradición que va de Pi y Margall a Joaquín Maurín y Lluís Companys: un acuerdo plurinacional, respetuoso y entre iguales, que ponga en cuestión el proyecto oligárquico y elitista de "conllevancia" que se ha impuesto en los últimos años y que abre paso a una nueva convivencia republicana, libre y solidaria entre los diferentes pueblos y gentes peninsulares.

Para que esto sea posible, es imprescindible, como sugería recientemente el soberanista republicano gallego Xosé Manuel Beiras, que las fuerzas progresistas y republicanas españolas comprendan que buena parte de los soberanismos 'periféricos' son aliados objetivos suyos. Y que los movimientos soberanistas y progresistas de las 'periferias' comprendan que, sin iniciativas que faciliten la alianza con estas otras fuerzas, difícilmente se ganará la batalla democrática que todos tenemos contra los protagonistas del chovinista y reaccionario Régimen actual.

A partir de estas consideraciones, un 'sistema crítico' al 1-0 -anticentralista, social y fraternal- aparece como una propuesta que buena parte del soberanismo progresista podrá hacer suya. Con un objetivo irrenunciable: facilitar las alianzas que permitan, lo antes posible, el impulso de verdaderas propuestas constituyentes, de refundación republicana, municipalista e internacionalista, en las naciones 'periféricas', en el conjunto del Estado y seguramente en Europa.

Este republicanismo del siglo XXI no puede dejar de cuestionar el papel que la restauración borbónica ha tenido en la consolidación de un Régimen insuficientemente democrático, económicamente especulativo e insostenible, y nada respetuoso del pluralismo nacional de la "piel de toro". Pero debe incluir, sobre todo, una serie de principios y reglas que aseguren la regeneración política, el progreso social, la defensa de los bienes comunes, el respeto a la diversidad, la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras y la radicalización democrática (incluido el derecho de los pueblos a autodeterminarse y a compartir libremente soberanías entre ellos).

1-0: razones para movilizarnos y votar

El gran reto es conseguir que este proyecto de fondo se abra paso entre la niebla y el ruido actuales, el 1-O y los días siguientes. Si lo conseguimos, habremos contribuido modestamente, desde nuestro pequeño país, a crear un horizonte de mayor libertad, más amable y menos brutal, para todas las mujeres y hombres del común, en la península y más allá.

05/09/2017

Gerardo Pisarello es primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los impulsores de Catalunya en Comú